

Miércoles 20 de junio de 2018



Agenda CTI: Acuerdos, discrepancia o fisura

Todavía hay espacio para las sorpresas en el tema de la ciencia y la tecnología. La semana pasada, antes del tercer debate, dijimos que, en esta materia, las propuestas de los candidatos presidenciales estaban relativamente claras. La incertidumbre solamente estaría en cómo resolver las diferencias entre los partidos coaligados sobre temas específicos. Ahora, la discrepancia o fisura, sin embargo, puede ser mayúscula. Al menos podría ser el caso en el equipo puntero en las encuestas y en un tema crucial: alimentos genéticamente modificados.

En las plataformas electorales, el mayor acuerdo está en elevar el nivel de inversión en ciencia y tecnología. La coalición "Juntos haremos historia" (Morena, PT y PES), en su Proyecto de Nación 2018-2024, destaca la intención de cumplir con el objetivo de alcanzar un nivel de inversión nacional (pública y privada) de uno por ciento del PIB en el sector (pág. 94). Incluso, Esteban Moctezuma Barragán, designado como secretario de Educación Pública si gana Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo, en diálogo sostenido con investigadores del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que la inversión se llevaría al 1.5 por ciento del PIB y se lograría a través de incentivos fiscales "esto es, créditos fiscales que no existen ahora" (13.06.2018). En realidad, los créditos sí existen y no se ha logrado alcanzar el limitado nivel de inversión, así que menos probable será si se incrementa.

Por su parte, la coalición "Por México al Frente" (PAN, PRD y MC) señala la necesidad de una política de Estado y también coincide en que se debe incrementar la inversión, pero se refiere al presupuesto público y no indica en qué proporción (pág. 34). Por último, la coalición "Todos por México" (PRI, PVEM y

Panal) sostiene que se debe fortalecer el sistema sectorial y estimular la inversión pública, privada y social para superar el uno por ciento del PIB (pág. 37). Incluso, el candidato José Antonio Mead, en la reunión que sostuvo con la ANUIES destacó que incrementaría el presupuesto para ciencia y tecnología de 0.5 a 1.5 por ciento del PIB (0.4.05.2018).

Las fuerzas políticas comparten la necesidad de incrementar la inversión y las diferencias están en el volumen de incremento, así como la participación relativa de gasto público o privado. No obstante, se asoma lo que podría ser una diferencia mayor. En el tercer y último debate, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció, en un eventual triunfo de su candidatura, el nombre de la persona que se haría cargo de dirigir el Conacyt. El nombramiento es para la reconocida biotecnóloga María Elena Álvarez-Buylla, distinguida con el premio nacional de ciencias 2017, pero sobre todo conocida por su activismo en defensa del maíz y su oposición a los transgénicos. El dato fue registrado en la comunidad científica. También, seguramente, algo de sorpresa les causaría a Víctor Villalobos, la persona que AMLO designó para hacerse cargo de la Sagarpa y a Alfonso Romo Garza, el coordinador de su Proyecto de Nación 2018-2024. Si pertenecen al mismo equipo ¿por qué habrían de sorprenderse? Esencialmente porque representan posiciones antagónicas a la que desempeñaría la responsable de dirigir el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas y sobre un tema que está en discusión desde hace más de dos décadas, precisamente cuando se introdujo en el mercado el primer alimento genéticamente modificado (OGM). La polémica perdura hasta hoy.

En un extremo están los detractores que señalan los daños potenciales que podría infligir la utilización de los OGM, incluye a personalidades de la ciencia, como María Elena Álvarez-Buylla, pero principalmente a organizaciones ambientalistas y de defensa de los derechos de los consumidores. En el lado apologético están quienes destacan las bondades de estos productos para la alimentación y el desabasto —como Alfonso Romo y Víctor Villalobos—, aunque también incluye a científicos, como Francisco Bolívar Zapata, así como a la industria biotecnológica. El empresario Alfonso Romo, el coordinador del Proyecto de Nación, como se expone en la página electrónica de AMLO, actualmente es inversionista fundador de Synthetic Genomics y activo en otra empresa, Nature Source Improved Plants, “es líder en la aplicación de las más avanzadas tecnologías para el mejoramiento genético” (<https://goo.gl/cxPhNE>). En el ámbito educativo también es dueño de la Universidad Metropolitana de Monterrey.

Por su parte, Víctor Villalobos, el eventual encargado de la Sagarpa si gana las elecciones AMLO, ha promovido el desarrollo de la biotecnología agrícola y se ha desempeñado en la academia y en la función pública como subsecretario. Sin embargo, cuando se anunció su nombramiento, la organización Greenpeace, denunció que Villalobos tenía “una marcada tendencia a favorecer los intereses de la industria biotecnológica” (<https://goo.gl/9b4GXu>).

En fin, la pregunta sigue siendo ¿cómo se conciliarán los intereses y las posiciones antagónicas en un posible gabinete?, porque no solamente son decisiones basadas en el conocimiento, están implicados aspectos de orden económico, ético y político.

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES